

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

Medellín, siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORIA AMPARO LÓPEZ GIRALDO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-014-2020-00313-01).

ANTECEDENTES:

La demandante pretende el reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde el 01 de octubre de 2019, junto con los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, manifestó que nació el 24 de enero de 1962. Que el 04 de marzo de 2020 radicó solicitud ante Colpensiones para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, la que fue resuelta de manera afirmativa por Resolución SUB 91496 del 14 de abril de 2020 conforme a los presupuestos de la Ley 797 de 2003, sin reconocimiento del retroactivo pensional por no reportarse la novedad de retiro, siendo que la última cotización data del 30 de septiembre de 2019. Se interpusieron los recursos de ley obteniendo igual decisión por acto administrativo SUB127364 del 12 de junio de 2020.

La entidad convocada dio respuesta oportuna al libelo, y aunque aceptó cada uno de los fundamentos de hecho, se opuso a la totalidad de las pretensiones indicando que la prestación fue concedida ajustada a derecho y aunque en efecto se reportaron cotizaciones hasta el mes de septiembre de 2019, no se reportó la novedad de retiro, la que por demás pudo legalizar con la documental necesaria sin que lo haya hecho. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer retroactivo pensional sin la acreditación de los requisitos legales, improcedencia del pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, surtido el trámite de rigor, profirió sentencia el 30 de noviembre de 2021, oportunidad en la que declaró el derecho que le asiste a la demandante al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 01 de octubre de 2019. CONDENÓ a Colpensiones a pagar la suma de \$48.475.276 por concepto del retroactivo pensional causado entre el 01 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2020. AUTORIZÓ a Colpensiones a realizar los descuentos por aportes en salud. DECLARÓ fundada la excepción de improcedencia de intereses moratorios y en su lugar CONDENÓ al reconocimiento de la indexación. CONDENÓ en costas a Colpensiones, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.000.000.

Inconforme con la decisión de manera parcial, el mandatario judicial de la demandante interpuso el recurso de apelación, a quien le fue concedido. Como argumentos de la alzada afirmó que en este caso la tardanza para el reconocimiento del retroactivo concedido no tiene alguna justificación en tanto la jurisprudencia sentada por las altas cortes es unificada en cuanto a que no es exigible reportar el retiro del Sistema para el disfrute de la prestación, sobre todo porque en este caso existían todos los elementos de juicio para advertir su intención de no continuar efectuando cotizaciones, teniendo la entidad incluso una circular vigente donde esa novedad ya no es requerida.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Al tenor de lo normado en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, la Sala estudiará los puntos objeto de inconformidad planteados por la apoderada recurrente.

La Sala igualmente en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de Colpensiones, quien no acudió a la alzada.

Lo primero que debe decirse es que la generalidad de los hechos de la demanda no están en controversia, en tanto de la prueba documental queda claro que la demandante nació el 24 de enero de 1962 (Pág. 11 Archivo 02); que fue pensionada por vejez mediante la Resolución SUB 91496 del 14 de abril de 2020 a partir del 1° de mayo del mismo año, en cuantía inicial de \$6.108.584, bajo los postulados de la Ley 797 de 2003 sin reconocimiento de retroactivo alguno. Tampoco se discute que el último ciclo pagado por el empleador de éste fue el de septiembre de 2019, sin hacer el reporte de la novedad de retiro del sistema.

Dejando de lado tales presupuestos, el objeto del debate se circunscribe a determinar si a la promotora del proceso le asiste el derecho al retroactivo pensional; de ser el caso, a partir de qué fecha se debe liquidar; y si son procedentes los intereses moratorios.

Pues bien, para abordar el asunto debe acudirse a la postura que tiene asentada de vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral donde se ha advertido que son dos momentos diferentes los referidos a la causación y el disfrute del derecho a la pensión de vejez, en clara aplicación de los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, entendiendo por la primera aquel instante en que el afiliado cumple con los requisitos exigidos por la norma, esto

es, edad y semanas cotizadas y/o tiempo servido, mientras que el segundo, hace relación al evento a partir del cual éste se desafilia del sistema con el fin de iniciar el goce de su pensión de vejez.

Sobre esta materia, en especial sobre las exigencias de desafiliación o retiro del sistema para dar paso al disfrute de la pensión de vejez, se debe dejar claro que si bien es cierto que se tiene como requisito para tener derecho a este el reporte de la novedad del retiro por parte del empleador, debe anotarse en igual medida que si este último omite hacerlo no es plausible trasladar en el afiliado las consecuencias y afectaciones de lo que ello implica, lo que quiere decir que ante la falta de diligencia por parte del dador del empleo para proceder con la desafiliación del Sistema de quien fungió como su colaborador, no es posible incurrir en la vulneración de los derechos adquiridos del afiliado, como ocurre en el evento de no reconocer las mesadas causadas desde el momento de la satisfacción de las exigencias mínimas dispuestas por el legislador aun cuando el afiliado exterioriza su voluntad de no continuar amparado para los riesgos invalidez, vejez o muerte, en el sistema general de seguridad social en pensiones, manifestación que bien puede ser expresa, reportando la novedad de retiro, o tácita, mediante actos que así lo den a entender, pues sobre el alcance y sentido de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, la Alta Corporación ha adoctrinado que cuando no se cuente con el acto formal de desafiliación, deben examinarse las circunstancias fácticas del caso, a fin de determinar en qué momento debe entenderse que el afiliado desiste de su afiliación al sistema pensional y se hace exigible la mesada causada, como cuando se da la terminación del vínculo laboral del afiliado, se presenta una falta del pago de cotizaciones, y el cumplimiento de los requisitos en materia de edad y de cotizaciones, que no dejen duda de la intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho pensional (Ver Rdo. 38776 del 1 de febrero de 2011, SL4611-2015, SL5603-2016, SL9036-2017, SL900-2018 y SL3310-2022).

En el asunto, el historial laboral de la demandante en efecto no muestra el reporte expreso de su último empleador "*Intercalo Impresores S.A*" de la novedad de retiro, pero sí se está en presencia de diversas circunstancias de donde se deriva su intención inequívoca de retirarse del sistema, así

formalmente no exista novedad de desafiliación, manifestada mediante actos externos e inequívocos como la suspensión definitiva de los aportes desde septiembre de 2019, sumado a la reclamación de la prestación elevada el 04 de marzo de 2020 por el cumplimiento de los requerimientos de edad y semanas desde 2019, parámetros que se tornan en válidos para establecer la fecha de inicio del disfrute de su pensión.

Corolario de lo expuesto, se tiene que a partir de las muestras innegables de la voluntad de la afiliada de desvincularse definitivamente del sistema general de pensiones, la fecha de causación del derecho se dio el 24 de enero de 2019 cuando arribó a los 57 años y ya contaba con el número mínimo de semanas de cotización, y la de disfrute, acaeció a partir del 1° de octubre de 2019, cuando se entiende que efectivamente se retiró del sistema, resultando en esos términos acertada la decisión del *a quo* cuando procedió con el reconocimiento del retroactivo perseguido a partir de esa data, y hasta el 30 de abril de 2020, que se constituye en el día anterior al que se hizo el pago de parte de la administradora, concepto que asciende a la suma de \$47.974.160 como se detalla a continuación, inferior a la ordenada en la sentencia que se revisa, sin detalle de los valores por año obtenidos para notar el yerro en el que pudo incurrirse, punto sobre el que habrá de ser modificada la providencia en razón del grado de consulta en favor de Colpensiones.

AÑO	VR. MESADA	Nº MES	TOTAL
2019	\$ 5.884.956	4	\$ 23.539.824
2020	\$ 6.108.584	4	\$ 24.434.336
		TOTAL	\$ 47.974.160

Estos guarismos no estuvieron afectados por el fenómeno de la prescripción en tanto la definición del derecho pensional se efectuó por acto administrativo del 17 de octubre de 2014 notificado el 20 de mayo de 2020 (Pág. 12 Archivo 02), confirmado por Resolución del 12 de junio de 2020 (Págs. 29-36 Archivo 02), siendo promovida la demanda el 13 de octubre de ese mismo año, sin que claramente hayan transcurrido los tres años establecidos en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Respecto a la condena de los intereses moratorios, debe recordarse que la

Corporación ha sostenido que, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por regla general resultan procedentes ante el retardo en el pago de las mesadas pensionales, ya que buscan resarcir los efectos adversos que la mora del deudor produce al acreedor y que de forma excepcional no se genera su imposición pero solo en aquellos eventos en que: i) existe disputa o incertidumbre respecto de los posibles beneficiarios o titulares del derecho pensional; ii) cuando se trata de una reliquidación pensional; iii) cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo; iv) cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial (Ver SL3947-2020).

En ese orden, se aprecia que en el sub lite aunque se trata de la aplicación de un criterio jurisprudencial, este es de vieja data cuya aplicación se suple desde hace más de una década, por lo que estando ante situaciones y actos inequívocos de desafiliación no se hace posible justificar el no pago de mesadas o su reconocimiento de manera tardía, lo que a su vez no permite que ante estos eventos se exonere a la administradora de este medio resarcitorio, por lo que en virtud del artículo 9 de la ley 797 de 2003, la enjuiciada tenía un plazo de 4 meses contados a partir de la presentación de la radicación de solicitud administrativa para resolver y pagar las mesadas pensionales debidamente causadas. De ese modo, como quiera que la reclamación de la prestación se efectuó el 04 de marzo de 2020, la entidad demandada incurre en mora de estas mesadas a partir del 05 de julio de 2020 y hasta tanto se materialice el pago de lo condenado para lo cual habrá de tenerse en cuenta la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.

En conclusión de todo lo dicho, y sin necesidad de otro tipo de argumentaciones, la sentencia venida en apelación se habrá de revocar parcialmente en tanto se había absuelto de los intereses moratorios para en su lugar concederlos a partir del 05 de julio de 2020, debiendo revocarse la indexación ordenada y confirmarse en lo demás.


Por la forma en que fue resuelta la alzada en esta instancia no se causaron costas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **REVOCA parcialmente** la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, en el sentido de ordenar a cargo de Colpensiones el reconocimiento de intereses moratorios a partir del 05 de julio de 2020 y hasta tanto se materialice el pago del retroactivo adeudado con revocatoria de la indexación ordenada. **MODIFICA** el valor a pagar por concepto de retroactivo pensional en la suma de \$47.974.160. **CONFIRMA** en lo demás. Sin costas.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501420200031301
Proceso:	Ordinario
Demandante:	GLORIA AMPARO LÓPEZ GIRALDO
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	7/12/2022
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 9/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario